

**REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO**



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA EN ORALIDAD DE BOGOTA D.C.

Bogotá, D.C., ---21 de junio de 2023

Proceso Ejecutivo de Alimentos
Radicado 2021-00591

Procede el despacho a decidir el incidente de nulidad propuesto por el ejecutado a través de apoderado judicial.

ANTECEDENTES

El señor JHON FREDY ARIAS CARO a través de apoderado judicial contestó la demanda ejecutiva instaurada en su contra por ANDRES ESTEBAN ARIAS LOZANO, oportunidad en que propuso como excepción “NULIDAD DEL PROCESO POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN”.

Argumenta el apoderado del incidentante que el señor JHON FREDY no fue notificado de ninguna forma, eso quiere decir que por la indebida notificación del auto admisorio de la demanda (no fue notificado de la forma indicada en la ley) genera NULIDAD del proceso, precisamente por entorpecer el derecho a la defensa del demandado, aún más que existe un EMBARGO en su contra, el aquí demandante conoce la dirección de notificación tanto del domicilio como de su trabajo, porque en NOTIFICACIONES así lo puso, dice desconocer el correo electrónico del demandado.

Previo a referenciar la notificación de que trata el art. 291 del C.G.P., manifiesta que dicha notificación tiene como finalidad enterar al demandado que contra el cursa un proceso, para que dentro del término de traslado conteste la demanda, así ejerza su derecho de defensa, principio fundamental de cualquier procedimiento, aquí el demandado se enteró porque fue notificado por parte de la empresa del embargo en su contra.

Ahora bien, aunque inicialmente sólo se corrió traslado de la excepción de Pago Parcial de la Obligación, con posterioridad el despacho mediante auto calendado 19 de octubre de 2022 se corrió traslado a la ejecutante de la nulidad propuesta por el ejecutado.

En traslado al ejecutante manifestó que, de conformidad con lo establecido en el art. 8º del Decreto 806 de 2020, la responsabilidad de notificar el auto admisorio de la demanda le corresponde exclusivamente al Juzgado, siendo obligación del demandante únicamente allegar al juzgado el correo electrónico de la parte demandada. Inicialmente y al no tener conocimiento del correo electrónico personal del demandado; se relacionó el correo electrónico del lugar de trabajo, oficina de Recursos Humanos – Ciplas, del padre del padre del ejecutante; el juzgado envió oficio No. 2122 de embargo el 29 de noviembre del año 2021, el que fue confirmado al día siguiente por María Isabel Escobar Foz – Directora de Recursos Humanos. Surtida la etapa inicial del proceso, procede a notificar al demandado señor JHON FREDY ARIAS CARO el 27 de enero de 2022. Por lo cual solicita negar lo pretendido

por la parte demandada por considerar aclarado de manera amplia y ajustados a lo ordenado respecto a notificaciones.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero señalar que el régimen de las nulidades procesales gira en torno a los principios de la especificidad, protección y convalidación. Así lo ha enseñado la Corte Suprema de Justicia, aunque en vigencia del Código de Procedimiento Civil, en jurisprudencia que se considera aplicable al caso, en que está vigente el Código General del Proceso, en razón a que ambos se inspiran en esos mismos principios: *“Las nulidades procesales no responden a un concepto netamente formalista, sino que revestidas como están de un carácter preponderantemente preventivo para evitar trámites inocuos, son gobernadas por principios básicos, como el de especificidad o taxatividad, trascendencia, protección y convalidación. Por ello, siguiendo la orientación de restringir en lo posible los motivos de invalidez procesal, el Código de Procedimiento Civil consagró todo un sistema a dicho propósito, en cuanto consignó reglas en relación con la legitimación y la oportunidad para alegarlos, dejando al juez la potestad de rechazarlas de plano cuando la solicitud de nulidad se funde en causal distinta de las determinadas en ese capítulo, en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otro incidente de la misma índole, o cuando se propone después de allanada (art. 143). Esto significa, entonces, que las causales de nulidad procesal no pueden ser formuladas por cualquier persona, ni en el momento que discrecionalmente quiera.”* CSJ SC 017-1997 del 22 de may. de 1997, rad. 4653. En el mismo sentido: SC 018 2002, del 20 de feb. de 2002, Cas Civ. del 29 de feb. de 2012, rad. 5000131030012003-03026-01)^[1]

También la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación con el tema: *“... Es entonces al legislador a quien le compete, en desarrollo del artículo 29 de la Constitución Política, determinar “las formas propias de cada juicio” y, en desarrollo de esta función, determinar las irregularidades que generan nulidad para garantizar la vigencia de las garantías del debido proceso. Es sólo por excepción que la Constitución Política toma directamente una decisión en la materia, cuando el inciso final del artículo 29 dispone que: “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. En este sentido, esta Corte ha reconocido que “corresponde al legislador dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a través de las correspondientes fórmulas normativas las formas o actos procesales que deben ser cumplidos para asegurar su vigencia y respeto. En tal virtud, la regulación del régimen de las nulidades, es un asunto que atañe en principio al legislador, el cual puede señalar, con arreglo a dichos criterios y obedeciendo al principio de la proporcionalidad normativa, las causales o motivos que generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad de las actuaciones procesales y consecuentemente el debido proceso”*^[2]. Así, en ejercicio de esta competencia normativa, tanto el CPC (artículo 140), derogado, como el CGP (artículo 133), vigente, determinan las causales de nulidad procesal, cuyo carácter taxativo fue declarado constitucional por esta Corte. En este mismo sentido, también hace parte del margen de configuración normativa del legislador en la materia, la determinación de las hipótesis en las que el vicio puede ser subsanado o convalidado y las que no^[3], así como la precisión de las consecuencias que la nulidad procesal acarrea. Esto quiere decir que el legislador establece, por esta vía, una gradación de la importancia concreta de las formas procesales para determinar (i) los defectos procesales que generan nulidad y los que no; (ii) el carácter saneable o insaneable de determinado vicio procesal; y (iii) las consecuencias de la declaratoria de nulidad procesal. Se trata de decisiones que hacen parte de la competencia del Congreso de la República para diseñar los

procesos judiciales y, de esta manera, establecer el proceso como uno de los instrumentos esenciales para la eficacia del derecho fundamental de acceso a la justicia y para la realización de la justicia y la igualdad materiales...”^[4]

Es entonces el propio legislador el que regula las formalidades de los actos procesales y establece las sanciones que su inobservancia impone, entre ellas la nulidad de los procesos cuando se produce alguna de las circunstancias que taxativamente enlista el artículo 133 del Código General del Proceso; también se ocupa la ley de señalar la oportunidad en que tales defectos deben alegarse y la forma como pueden sanearse. Se busca en tal forma garantizar la seguridad jurídica y evitar la proliferación de incidentes de nulidad.

En el caso concreto pretende el apoderado del demandado se declare la nulidad de lo actuado respecto a la indebida notificación del auto que Libró Mandamiento de Pago (15 de octubre de 2021) argumentando que la notificación no se realizó con las formalidades del art. 291 del C.G.P., pedimento que no resulta procedente por cuanto el demandado fue debidamente notificado por este despacho judicial a través del correo electrónico jhon.fredyarias121@gmail.com suministrado por el propio señor JHON FREDY ARIAS CARO (ver anexo 015 de este cuaderno), notificación que se realizó atendiendo las previsiones del art. 8º del Decreto 806 de 2020 (norma vigente para ese momento) tal como se evidencia del anexo 016 del expediente digital que nos ocupa, luego no se evidencia inconsistencia alguna en la notificación que pueda generar nulidad, máxime que el demandado a través de apoderado judicial, dentro del término legal contestó la demanda y propuso excepciones de mérito, luego no se le está vulnerando el derecho de defensa.

Ahora bien, no son de recibo las manifestaciones realizadas por la parte ejecutante al afirmar que el acto de notificación es responsabilidad del juzgado, por cuanto este le compete a la parte demandante, sin embargo, cuando el interesado no ha cumplido con este requisito y el mismo demandado aporta el correo electrónico para surtir la notificación ordenada en el auto que admitió la demanda o que libró mandamiento de pago, como es el caso que nos ocupa, procede el despacho a realizar dicha notificación atendiendo las formalidades establecidas en la normatividad legal vigente.

Por lo brevemente expuesto, se desprende que hay lugar a despachar desfavorablemente la nulidad alegada por el ejecutado.

En consecuencia, el JUZGADO NOVENO DE FAMILIA EN ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar NO PROBADA la NULIDAD propuesta, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte incidentante, incluyendo en la misma como agencias en derecho la suma de **\$500.000**. Liquídense.

NOTIFÍQUESE



CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ
JUEZ
(2)

ER

JUZGADO NOVENO (9) DE FAMILIA DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR ESTADO – SECRETARÍA

Bogotá D.C., **22 de JUNIO de 2023**

El auto anterior queda notificado a las partes
por anotación en el ESTADO No. 99

ALISSON SANTAMARÍA CÁRDENAS

Secretaria